



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-008-2020-00084-01
Demandante:	Gladys Rosario Zuluaga Gallo
Demandado:	Colpensiones y Protección S.A.
Asunto:	Apelación y Consulta
Procedencia:	Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

**Medellín, julio veintiocho (28) de dos mil veintiuno (2021)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 806 de 2020, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de Protección S.A., así como el grado jurisdiccional de Consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 20 de abril del año 2021, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la Señora GLADYS ROSARIO ZULUAGA GALLO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.,  
Radicado 05001-31-05-008-2020-00084-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora GLADYS ROSARIO ZULUAGA GALLO, instauró demanda ordinaria laboral, en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare la ineficacia de su afiliación a Protección S.A., ordenándose su reactivación a Colpensiones, sin solución de continuidad; se ordene a Protección S.A., el traslado del saldo de la cuenta de ahorro individual a Colpensiones, con sus rendimientos, frutos, intereses, sumas adicionales, cuotas de administración, aportes al fondo de solidaridad, comisiones, seguro previsional, condenando Colpensiones recibir tales dineros.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que la demandante nació el 1º de febrero de 1963, contando con 1368.43 semanas cotizadas; que cuando estaba laborando al servicio de la Papelería Marión, en julio de 1994, una exempleada de la empresa, que había empezado a laborar en Protección, llegó a su puesto de trabajo, indicándole que dicha administradora era la mejor opción para tener seguridad en su futuro pensional ante la crisis del ISS, pues los fondos privados estaban soportados en empresas muy sólidas, además que la pensión sería heredable, sin explicársele las características del régimen, ni las consecuencias de su decisión.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la edad de la demandante y su

afiliación al ISS, sin constarle los demás hechos de la demanda, por ser ajenos a su representada.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la nulidad o ineficacia en el traslado de régimen; devolución de cuotas de administración; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas; prescripción; excepción innominada y compensación.

Por su parte, **PROTECCIÓN S.A.**, indicó que la asesora le brindó información integral y completa a la accionante, respecto de las características del Régimen de Ahorro Individual, indicándole las condiciones particulares de dicho régimen, adoptando la actora la decisión de trasladarse de manera libre y espontanea.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP; inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe; prescripción y la excepción innominada o genérica.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 20 de abril del año 2021, el Juzgado de conocimiento declaró la ineficacia del traslado que realizó la actora, asistiéndole derecho a acceder a los beneficios del Régimen de Prima Media con Prestación Definida; ordenó a Protección S.A., trasladar a Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, como cotizaciones, cuotas de administración, seguros previsionales, sumas

adicionales de la aseguradora, con sus frutos e intereses, así como los rendimientos que se hubieren causado, lo cual deberá gestionar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia; ordenó a Colpensiones, recibir los aportes y tener como afiliada a la actora; condenó en costas a Protección S.A.

#### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

##### **Protección S.A.**

La apoderada de la AFP presentó recurso de apelación en contra de la providencia, respecto de la orden de trasladar a Colpensiones los gastos de administración y las sumas adicionales de la aseguradora, ello por cuanto se trata de comisiones causadas durante la administración del dinero de la cuenta de ahorro individual de la actora, descuentos realizados conforme a la ley y como consecuencia de una buena administración, como es legalmente permitido. Afirma que con la condena impuesta, se estaría generando un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones, por recibir una comisión que no está destinada a financiar la pensión de la demandante, aunado a que se ordena trasladar los rendimientos financieros y si la consecuencia de la declaratoria de la ineficacia, es que las cosas vuelvan al estado anterior, el contrato de afiliación nunca existió, por lo que Protección no debió administrar los recursos de la cuenta de la actora, no se causaron los rendimientos y no existió el cobro de esa administración.

Expone que los seguros previsionales, ya fueron girados a una aseguradora, para que en caso de que existiere el riesgo de sobrevivencia o invalidez, la compañía pagara esa suma adicional necesaria para el financiamiento de las respectivas pensiones, encontrándose la AFP imposibilitada para recobrar esa prima.

Finalmente aduce que frente al cobro del 3% destinado a los gastos de administración y las primas de seguros previsionales, opera la prescripción, por cuanto son conceptos que se descuentan periódicamente y no financian la pensión de vejez.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de la demandante y de la codemandada Colpensiones. El apoderado de la actora solicitó se confirmara la Sentencia, teniendo en cuenta la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, en múltiples providencias, siendo claro que no se probó por parte de la AFP, que se le hubiere dado la información requerida a la demandante, que la llevara a tomar una decisión libre y voluntaria.

Por su parte, la apoderada de Colpensiones solicita que en caso de confirmarse la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, se adicione la providencia en el sentido de ordenar la devolución de los gastos de administración y los seguros previsionales, debidamente indexados, conforme a la Sentencia SL 1689 del 2019, así como el porcentaje de garantía de pensión mínima.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la demandante nació el 1° de febrero de 1963, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía, obrante en el documento 01.demanda anexos admisorio folio 51.
- Que la actora se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de Protección S.A., el 19 de julio de 1994, con fecha de efectividad el 1° de agosto de 1994, de conformidad con el formulario obrante en el documento 01.demanda anexos admisorio folio 21.
- Que la accionante acredita un total de 1387.72 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral obrante en el documento 05 respuesta Protección folios 95 a 112.

## **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala si:

¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta, proferida en el presente proceso por el señor Juez Octavo Laboral

del Circuito de Medellín, determinando si es ineficaz el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por Protección S.A., efectuado por la demandante?

¿Si como consecuencia de la ineficacia, debe ordenarse a Protección S.A., el traslado de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas de seguros previsionales?

#### **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, es ineficaz el acto de traslado por incumplimiento del deber de información y por lo tanto debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, en consecuencia, la sentencia debe ser ADICIONADA en el numeral segundo, para ordenar a PROTECCIÓN S.A., el traslado a Colpensiones de los aportes al Fondo de Garantía Mínima, que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la afiliada, CONFIRMÁNDOLA en lo demás.

#### **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El régimen de prima media con prestación definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las

prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser*



*inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos:

Sentencia	Línea Jurisprudencial
SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008	FUNDADORA  Se produce la nulidad del traslado de régimen pensional por incumplimiento del deber de información, es insuficiente el formulario de vinculación para acreditar el consentimiento informado  Inversión de la carga de la prueba hacía las Administradoras de Pensiones
SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008	FUNDADORA
SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011	CONFIRMATORIA
SL31314 del 06 de diciembre de 2011 de instancia.	CONFIRMATORIA
SL, SL12136 Rad 46292 del 03 de septiembre de 2014	La sanción del acto de traslado cuando se incumple el deber de información lo es la INEFICACIA del acto de traslado, de conformidad con el artículo 271 de la ley 100 de 1993.
SL 19447(47125) del 27 de septiembre de 2017	Debe acreditarse el cumplimiento del deber de información encontrándose o no la persona bajo en el régimen de transición.
SL 17595-2017 (46922) del 18 de octubre de 2017	CONFIRMATORIA
SL413 (52704) del 21 de febrero de 2018	CONFIRMATORIA  La afiliación o traslado de régimen pensional no es dable deducirlo en todos los casos con el simple diligenciamiento, firma y entrega del formulario de afiliación.
SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018	CONFIRMATORIA  Las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado no son suficientes para acreditar el cumplimiento del deber de información, quien debe probar la diligencia y cuidado es el Fondo de Pensiones, quien estaba obligado a emplearla.
SL4989-(47125) del 14 de noviembre de 2018.	CONFIRMATORIA  Ineficacia de la afiliación por incumplimiento del deber de información  Inversión de la carga de la prueba hacía las

	Administradoras de Pensiones
SL 1452 (68852) del 03 de abril de 2019	ACLARATORIA  El deber de información es permanente y aunque ha tenido distintas fases en su regulación normativa, ha sido siempre ineludible.  No se requiere una situación consolidada ni ser beneficiario de un régimen de transición para la aplicación del precedente.
SL1421 (56174) del 10 de abril de 2019	CONFIRMATORIA –
SL1688 (68838) del 08 de mayo de 2019	CONFIRMATORIA-  Imprescriptibilidad de la Acción  La información debe ser entregada de manera oportuna y por lo tanto la ineficacia debe ser evaluada respecto a la asesoría inicial, sin que se produzca su saneamiento en virtud de las reasesorías posteriores
SL1689 (65701) del 08 de mayo de 2019	CONFIRMATORIA-
SL3464 (76284) del 14 de agosto de 2019	CONFIRMATORIA-
SL4360 (68852) del 09 de octubre de 2019	CONFIRMATORIA-
SL4426 (79167) del 16 de octubre de 2019	CONFIRMATORIA  La transparencia es una norma de dialogo, que impone dar a conocer al afiliado toda la verdad objetiva de los regímenes.
SL1611 del 01 de julio de 2020	CONFIRMATORIA
SL2877 del 29 de julio de 2020	CONFIRMATORIA  Efectos de la ineficacia.

A los pronunciamientos anteriores se suman sentencias de las distintas Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tales como: SL782 del 14 de marzo de 2018, SL 3496 del 22 de agosto de 2018, SL361 del 13 de febrero de 2019, SL4933 del 30 de octubre de 2019, SL4937 del 13 de noviembre de 2019, SL5144 del 20 de noviembre de 2019, SL373 del 12 de febrero de 2020, SL600 del 25 de febrero de 2020, SL881 del 10 de marzo de

2020, SL985 del 18 de marzo de 2020, SL4381 del 26 de octubre de 2020, SL4336 del 04 de noviembre de 2020 y SL4388 del 11 de noviembre de 2020.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos subreglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso concreto, se establece el traslado de régimen pensional de la señora Gladys Rosario Zuluaga Gallo, a través de la AFP Protección S.A., el 19 de julio de 1994, con fecha de efectividad el 1° de agosto de 1994, de conformidad con el formulario obrante en el documento 01.demanda anexos admisorio folio 21, no obstante, el mismo no da cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“La firma del formulario al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones es insuficiente para dar por demostrado el deber de información, pues además de ello, la entidad administradora de pensiones tiene el deber ineludible de obtener del afiliado un consentimiento informado –(sentencia SL1688 de 2019); por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del decreto 692 de 1994.*

En el interrogatorio de parte practicado a la demandante, no se deriva prueba de confesión, toda vez que la misma indicó que estudió diseño, que se dedica a la atención domiciliaria; adujo que cuando se trasladó laboraba en Papelería

Marión y tenía una compañera de trabajo que se fue a laborar a Protección, cuando comenzó su trabajo como asesora fue a visitarlos y les dijo que la mejor opción era pasarse a los fondos privados, porque era la forma de tener una mejor pensión, les dijo que Protección pertenece a un grupo muy importante, ella decidió trasladarse por eso y porque la situación del ISS no era la mejor; quiere regresar a Colpensiones porque allí su pensión sería mejor; sabía que las semanas que tenía en el ISS no se perderían, por cuanto pasarían a Protección; sabía de los rendimientos; pero no sabía que lo que tenía que hacer era una especie de ahorro.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que en su momento Protección S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó Protección S.A. a la demandante, al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación.

### **Sobre los efectos de la ineficacia**

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora, razón por la cual no es posible atender la petición elevada por la apoderada de Protección S.A., en la

sustentación del recurso de alzada, tendiente a exceptuar del traslado las comisiones de administración y los seguros previsionales.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue Protección S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante,

deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, indicando:

*“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”*

*De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.*

*En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de aborro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Colofón de lo anterior, la orden de traslado impartida por la falladora primaria, se encuentra parcialmente ajustada a los anteriores criterios, por lo tanto, debe ADICIONARSE el numeral segundo del fallo, para ordenar a Protección S.A., trasladar también los aportes al Fondo de Garantía Mínima, que como se ha indicado, afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante.

### ***Indexación***

En relación con la solicitud presentada por la apoderada de Colpensiones, en los alegatos de conclusión, relacionado con que se ordene el traslado de todos los conceptos de manera indexada, debe señalarse, que a juicio de esta Sala, no procede dicha indexación, teniendo en cuenta que se está ordenando a la AFP demandada, devolver todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización realizada por la actora con los rendimientos financieros, los cuales compensan ampliamente la pérdida de capacidad adquisitiva de los valores a trasladar, aunado que las órdenes impartidas se encuentra conforme a las directrices planteadas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y con ello se está asegurando que Colpensiones reciba todos los valores que la entidad habría recibido, en el evento en el que la accionante, siempre hubiere estado afiliada en esa administradora pensional.

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A., se fija como agencias en derecho la suma de \$908.526.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se **ADICIONA** el **numeral segundo** de la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral de Circuito de Medellín, el 20 de abril de 2021, en el proceso ordinario instaurado por la señora GLADYS ROSARIO ZULUAGA GALLO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en el sentido de CONDENAR a PROTECCIÓN S.A., a trasladar también a COLPENSIONES, los aportes al Fondo de Garantía Mínima, que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante.

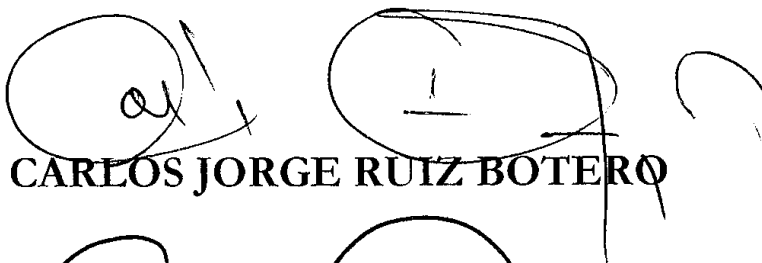
2.- Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., se fijan agencias en derecho en la suma de \$908.526.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**